

do: que con arreglo al artículo 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834, los Jueces letrados de los Estados y territorios que residan en los pueblos donde no residieren los Juzgados de Distrito, y á falta de aquellos los alcaldes de dichos pueblos, ó los que en ellos administren justicia, formarán á prevención la sumaria y primeras diligencias ejecutivas sobre contrabandos y negocios de las atribuciones de los Jueces de Distrito, dando cuenta á estos inmediatamente y pudiendo continuar bajo sus órdenes hasta ponerlas en estado de sentencia, si así convinieren: que segun la ley de 20 de Enero de 1869, la suspension del acto contra que se pide amparo, es ejecutivo y por lo mismo los jueces de 1ª instancia y á falta de ellos los alcaldes, pueden proceder á dar entrada á los juicios de amparo: que en el caso de que el Juez de 1ª instancia, de Los Reyes, fuera responsable por haber conocido del amparo de que se trata, del juicio de responsabilidad debian de conocer las autoridades judiciales de la federacion y no el Tribunal Superior del Estado de Michoacan; por lo expuesto, se decreta lo siguiente: 1º que se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Michoacan que declara: 1º que no ha lugar al juicio de amparo intentado por el ciudadano Brígido Mora ante el Juez letrado de Los Reyes, por no ser competente; y 2º que se compulse testimonio de las diligencias relativas al mismo juicio de amparo, para que se remitan al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacan, para los efectos á que hubiere lugar: 2º que vuelva este expediente al Juez de Distrito de Michoacan para que en estado pronuncie sentencia, previas las citaciones respectivas.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes, y publicándose por los periódicos archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Cor-

te Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Francisco Diego ante el Juez de Distrito de Yucatan, contra los actos del ciudadano Tesorero municipal, que le cobra dos pesos por quintal de unos tercios de tabaco en rama y unos tercios de azúcar quebrado, apoyado en una disposicion local.

PRELIMINARIO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

Los documentos que el ciudadano Tesorero de los fondos de este municipio ha adjuntado á su informe para justificar que los frutos nacionales á que se refiere el ciudadano Francisco Diego, en su ocurno de amparo, causan justamente el arbitrio que se le cobra, porque tambien se paga por los mismos productos del Estado, no dan el resultado que se propuso conseguir con ellos el informante; pues la certificacion librada por él, que por esta circunstancia no puede hacer fé en el propio negocio en que se interesa, tiene ademas el defecto de no expresar cuáles son los frutos que han ocasionado el derecho que se dice cubierto por los importadores; y los tres oficios que forman el complemento de dichos justificantes, sobre que solo participan el tránsito por la villa de Maxcaní de ciertos efectos, cuya

procedencia no está bien comprobada, no tratan de azúcar ni tabaco, que son los nacionales importados por el ciudadano Diego. Para que esos documentos con que el ciudadano Tesorero ha querido legalizar el cobro que motiva el presente juicio tuviesen alguna conducencia en él, era preciso que acreditaran, que el azúcar y el tabaco que produce el suelo de este Estado, causan á su importacion á esta ciudad, por las carreteras de Campeche y Sisal, los mismos derechos que se cobran á iguales frutos de otros Estados traídos por las propias vías; mas como no es esto lo que hasta aquí se ha probado, queda en pié el fundamento de la queja del ciudadano Francisco Diego, pues aparece ciertamente, que á él se le exige, por la importacion de dicho tabaco y azúcar, el pago de un impuesto á que no están sujetos los propios productos de este Estado; resultando, en consecuencia, que el decreto local que lo establece, es contrario al supremo de 1º de Mayo de 1868, y á la fracción 9ª del artículo 72 de la Constitución; que con aquel se invade la esfera de la autoridad federal, y que el amparo intentado con fundamento de la fracción 3ª del artículo 1º de la ley Orgánica de 20 de Enero de 1869, es justo y procedente. En este concepto, el fiscal concluye pidiendo: que vd. decreta, que la justicia de la Union ampara y protege al ciudadano Francisco Diego contra los actos del Tesorero de los fondos municipales de esta ciudad, que le cobra derechos de dos pesos por cada quintal de tabaco que importó por la canoa nacional "Victoria," procedente de Tabasco, y doce y medio centavos por igual peso sobre cinco tercios de azúcar importados por "Amalia," con procedencia del mismo Estado.

Mérida, Diciembre veintiuno de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*P. Huelos.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan.—Mérida, Enero siete de mil ochocientos setenta y uno.

Viste este juicio de amparo promovido por el ciudadano Francisco Diego, de este comercio, contra actos del ciudadano Tesorero municipal que le cobra dos pesos de derechos por quintal, de noventa y ocho tercios de tabaco en rama que recibió de Tabasco por canoa "Victoria," anclada en Sisal el 8 de Noviembre próximo pasado; y doce y medio centavos por quintal, de cinco tercios azúcar quebrada, procedente del mismo Estado, por canoa "Amalia," fondeada en Sisal el 6 del citado mes; cobro que verifica conforme al artículo 7º del plan de arbitrios de 9 de Mayo último, que va por cabeza invadiendo las atribuciones federales; el acto en que se niega la suspensión del acto reclamado; lo pedido por el ciudadano fiscal en lo principal; el informe de la autoridad contra quien se pide; las pruebas rendidas; lo alegado por las partes; la citacion para sentencia; y considerando: que segun confesion del quejoso en su alegato, ya no le cobran derechos municipales por el azúcar quebrado, porque no llegó á esta capital; quedando reducido el objeto de este juicio á solo los derechos del tabaco en rama; que por las minutas del administrador subalterno de rentas del Estado, agregadas á estos autos, se vé: que los efectos de que se trata han pagado derechos de importacion, patente de giro, de consumo; y ademas, se exige por ellos el arbitrio municipal, de dos pesos por quintal al tabaco en rama, arbitrio que no paga el tabaco cultivado en este Estado, como puede convencerse el que se imponga del artículo 7º del referido plan de arbitrios, pues por él lo causan los efectos introducidos en esta capital por las carreteras de Sisal y Campeche, es decir, las únicas vías por donde no viene dicho efecto cultivado en este Estado, como se probó en el amparo solicitado por el ciudadano José

Dominguez, y sí lo causa el que se trae de otros Estados: que tan es así, que el Tesorero municipal expresa en su informe, que dicho artículo 7º comprende, tanto á los efectos del Estado, como á los de fuera de él, pero no lo prueba ni dice que paguen aquel derecho los de este Estado, concretándose los avisos de su agente en Maxcamí á participarle la introduccion de maíz, frijol y panela en aquel punto, proveniente de Halachó, y á esto se contrae lo que certifica el mismo Tesorero, por cuya razon resulta, que no ha podido justificar que el tabaco en rama del Estado, venga á esta ciudad por la vía de Campeche para pagar el cuestionado derecho, esto, sin hacer mérito de que el certificado es de partidas tomadas de los libros de la tesorería Municipal, librado por el mismo tesorero, y que solo podría hacer prueba en su contra, fuera de que no expresa en él los efectos que hayan causado los derechos que se dicen cobrados: que el tabaco en rama del Estado no se introduce por las carreteras de Campeche y Sisal para pagar dos pesos por quintal de derecho municipal, es una verdad que queda demostrada con manifestar simplemente, que dicho efecto solo se produce por el Oriente y Sur del Estado, y que tiene vías mas cortas y directas que las mencionadas para su introduccion en esta capital, sin necesidad de ir á gastar mas fletes y tiempo por aquellas, y sin pagar un derecho de que no pueden librarse los efectos de fuera del Estado que vienen (por el comercio) de cabotaje, y tienen que reconocer Campeche ó Sisal, para entrar por sus respectivas carreteras, siendo tal el celo con que se les cobra el arbitrio municipal, que al volver los introductores al punto de su partida, tienen que presentar la constancia de haberlo satisfecho al comisionado respectivo de la Tesorería de este Municipio, para que en caso contrario se les obligue al pago en Maxcamí ó Sisal: que estas razones se han consignado en el amparo concedido al ciudadano José Dominguez, que obra en el periódico oficial acumulado en autos, y no las

ha podido combatir la autoridad contra quien se pide: que segun la suprema ley de 2 de Mayo de 1868, los Estados no pueden imponer, bajo ninguna denominacion, á los frutos de los otros, mayores contribuciones que las que impongan á los suyos; ley conforme á la cláusula 9ª artículo 72 de la Constitucion federal, violada en el presente caso. Por estos fundamentos legales y de conformidad con el parecer fiscal, la autoridad á nombre de los Supremos Poderes de la Union, decreta:

Primero: Se ampara y protege al ciudadano Francisco Diego contra los actos del ciudadano Tesorero de este Municipio que le cobra dos pesos por quintal, de noventa y ocho tercios tabaco en rama que recibió de Tabasco con arreglo al artículo 7º del plan de arbitrios de 9 de Mayo del año próximo pasado.

Segundo: Sáquese testimonio de este fallo para su publicacion y remítanse los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de conformidad con los artículos 18 y 27 de la ley suprema de 20 de Enero de 1869.—Notifíquese.—(Firmados.)—*I. Manzanilla.*—Ante mí, *José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Francisco Diego, contra los actos del C. Tesorero Municipal de Mérida, que le cobra dos pesos de derechos por quintal, de noventa y ocho tercios tabaco en rama que recibió de Tabasco por canoa "Victoria" anclada en Sisal el 8 de Noviembre del año próximo pasado, y doce y medio centavos por quintal, de cinco tercios azúcar quebrada procedente del mismo Estado por canoa "Amalia," fondeada en Sisal el 6 del mismo

mes, cobro que hace con arreglo al art. 7º del plan de arbitrios de 9 de Mayo de 1870, invadiendo las atribuciones federales; y considerando: que segun refiere el quejoso, en su alegato presentado en 1ª instancia, ya no se le cobran derechos municipales por el azúcar quebrado, porque no llegó á Mérida, y por lo mismo, el objeto de este juicio quedó reducido á los derechos que se cobran por el tabaco en rama: que por los documentos presentados por el administrador subalterno de rentas del Estado, se manifiesta, que los efectos de que se trata han pagado derechos de importacion, de patente de giro, de consumo, y que ademas se exige por ellos el arbitrio municipal de dos pesos por quintal al tabaco en rama, arbitrio que no paga el tabaco que se cultiva en el Estado, como se deduce del artículo 7º del referido plan de arbitrios, pues por él lo pagan los efectos introducidos en Mérida por las carreteras de Sisal y Campeche, esto es, por las únicas vías por donde no va dicho efecto cultivado en el Estado, y así lo causa el que se lleva de otros Estados; que este concepto se corrobora con la circunstancia, de que aunque el Tesorero municipal expresa en su informe que el artículo 7º del plan de arbitrios, comprende, tanto á los efectos del Estado, cuanto á los de fuera de él, pero sin dar razon ninguna y aun sin decir que paguen aquel derecho los de el Estado, concretándose los avisos de su agente en Maxcamí, á la introduccion de maiz, frijol y panela en aquel punto, procedente de Halachó, y á esto se contrae lo que certifica el propio Tesorero; de lo que resulta, que no se ha justificado que el tabaco en rama, del Estado, vaya á Mérida por la vía de Campeche para pagar el derecho en cuestion: que es una verdad que el tabaco en rama del Estado no se introduce por las carreteras de Campeche y Sisal para satisfacer dos pesos por quintal de derechos municipales, pues ese efecto solo se reproduce por el Oriente y Sur del Estado, y tiene vías mas directas y cortas que las mencionadas para ser introducido á Mé-

rida sin necesidad de consumir mas tiempo y mas dinero y fiatar por aquellas, y sin pagar un derecho de que no pueden librarse los efectos de fuera del Estado que llegan por cabotaje y tienen que reconocer Campeche ó Sisal para entrar por sus respectivas carreteras; y que segun la ley de 2 de Mayo de 1868, los Estados no pueden imponer, bajo ninguna denominacion, á los frutos de los otros, mayores contribuciones que las que impongan á los suyos, cuya ley está conforme con lo que dispone la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion federal, y cuya violacion importa el acto reclamado. Por lo expuesto, y en virtud de lo que dispone el artículo 101 de la Constitucion, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Yucatan el 7 de Enero próximo pasado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al ciudadano Francisco Diego contra el acto del Tesorero del Municipio de Mérida, que le cobra dos pesos por quintal, de noventa y ocho tercios de tabaco en rama que recibió de Tabasco aplicando para ese cobró el artículo 7º de «Plan de Arbitrios» de 9 de Mayo de 1870.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez de Distrito de Yucatan con copia certificada: de esta sentencia para los efectos consiguientes publíquese por los periódicos y archívese á su voz el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.) *S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Leon Guzman.*

Son copias. México, Febrero quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.